

CRONICA DEL MES

Octubre-diciembre

Ernesto Cruz Alfaro

El mes de octubre y, por extensión metonímica, todo el año de 1986, han quedado grabados ya en la memoria colectiva del país como el mes y el año en que El Salvador sufriera el terremoto más devastador de su historia. Aun cuando, en números absolutos, los efectos del terremoto en términos de víctimas humanas y pérdidas materiales pudieran parecer modestos en comparación a los de otros terremotos cercanos geográfica y temporalmente (por ejemplo, el de Guatemala en 1976, o el de México en 1985), el sismo que asoló San Salvador el 10 de octubre debe medirse en términos de su impacto proporcional sobre la crítica situación socio-económica que el país afrontaba ya antes del desastre telúrico.

El terremoto sorprendió al país cuando los anuncios de implementación del servicio militar obligatorio y de nuevas medidas fiscales para subsanar el déficit del presupuesto general de la nación de 1987, así como el cierre de los espacios políticos para el diálogo con el FMLN-FDR —tras el fracaso de Sesori— y la profundización de los esfuerzos para articular la gestión gubernamental en torno al plan “Unidos para reconstruir,” auguraban un punto de inflexión en el proceso político.

El 29 de septiembre, a través del Ministerio de Hacienda, el ejecutivo había remitido a la comisión de hacienda y especial del presupuesto de la asamblea legislativa el anteproyecto del presupuesto general, el cual destinaba 894 millones de colo-

nes —esto es, el 25 por ciento de los egresos del Estado— a los ramos de defensa y seguridad pública. El 1 de octubre, Duarte envió al legislativo un paquete de 14 proyectos de ley encaminados a reformar el sistema tributario de modo que los ingresos corrientes del Estado amortiguaran el déficit fiscal, calculado en 407 millones de colones (con la reforma tributaria se esperaba incrementar dichos ingresos en unos 300 millones de colones). En el paquete impositivo se contaba la “Ley de impuesto para la defensa de la soberanía nacional,” conocida como “impuesto de guerra,” que los 33 diputados del PDC aprobaron en la plenaria legislativa del día 2, ante la feroz oposición de las fracciones de la derecha. El mismo día, el presidente Duarte anunció que presentaría en breve a la asamblea un proyecto de ley para la regulación del artículo 215 de la constitución, relativo al servicio militar obligatorio, de modo que “no solo prestarán servicio militar los campesinos, los pobres, sino todos los salvadoreños, sin importar a qué grupo social pertenezcan.”

Las reacciones contra las reformas fiscales, en particular contra el “impuesto de guerra,” no se hicieron esperar. El 4, los sectores laborales cercanos a la UNTS y CST organizaron una marcha de protesta contra la profundización de la guerra que las medidas propiciarían. La marcha, denominada “Por la solución política al conflicto nacional y a las demandas de los trabajadores,” contó con la participación de no menos de 40 mil personas, pese a las

medidas intimidatorias y al dispositivo policial desplegado en San Salvador. Por su parte, el 6, la ANEP, la ASI, la SCIS y FENAPES emitieron un comunicado conjunto en el cual instaban a empresarios y trabajadores a "constituirse en una sola unidad para continuar luchando en defensa de los intereses de la patria, tan grandemente amenazados por las irracionales y arbitrarias medidas del gobierno." Este clima de intensa confrontación política que se empezaba a generar en la primera semana de octubre, sin embargo, fue pronto sobre-determinado por el impacto del terremoto.

Según el departamento de sismología del Centro de Investigaciones Geotécnicas, el sismo habría alcanzado una magnitud de 7.5 grados en la escala Richter, con epicentro ubicado a 5 kilómetros de profundidad bajo el área metropolitana de San Salvador, entre las localidades de San Marcos, Santo Tomás y Los Planes de Renderos. Sus efectos se hicieron sentir con mayor fuerza en el centro de San Salvador; en los barrios capitalinos sur-orientales de San Jacinto, La Vega, Candelaria, Santa Anita y Modelo que, según la Cruz Roja, habrían sido destruidos en un 50 por ciento; y en las poblaciones aledañas de San Marcos, Santo Tomás, Mejicanos, Cuscatancingo y Ayutuxtepeque.

Los informes oficiales más consolidados estimaban que el terremoto habría dejado un saldo de entre 1,200 y 1,300 muertos—315 de ellos tan sólo en el edificio Darío—, más de 10,000 heridos y unos 200,000 damnificados. En cuanto a pérdidas materiales, el viceministro de Vivienda informó el 22 que unos 400 edificios públicos y privados del centro capitalino habían sufrido daños de consideración. Entre las construcciones dañadas en el sector público se contaban todos los edificios del Centro de Gobierno, especialmente la asamblea legislativa, la fiscalía general, correos, migración, ANTEL y otros edificios públicos como el del ministerio de planificación (MIPLAN), el cual colapsó totalmente, el del ministerio de educación el del ministerio de agricultura y ganadería (MAG), el del centro jurista y ganadería (MAG), el del centro judicial, el de la Comisión Ejecutiva Portuaria (CEPA), el del Departamento de Tránsito, etc. También habrían sufrido daños de consideración varias instalaciones de la Fuerza Armada, entre ellas el Centro de Instrucción de Telecomunicaciones (CITFA), la Guardia Nacional, la Policía de Hacienda y la Primera Brigada de Infantería. Según el informe elaborado por MIPLAN sobre los daños en diversas dependencias gubernamentales, el ministerio de defensa requería aproximadamente 35.8 millones de colo-

nes para rehabilitar la infraestructura militar dañada. Por su parte, la embajada norteamericana calculó que los daños causados por el sismo en instalaciones militares situadas en la capital oscilaban entre 95 y 100 millones de dólares. Según el Departamento de Estado, la propia embajada habría sufrido "pérdidas totales" y sus costos de reconstrucción se estimaban en 70 millones de dólares.

El impacto sobre los servicios públicos fue también severo. El 15, el gerente de ANTEL, coronel Mauricio Vides Casanova, informó que más de 30 mil líneas telefónicas se encontraban totalmente fuera de servicio; el mismo día, el presidente de ANDA, mayor Alvaro Salazar Brenes, indicó que había más de 500 tuberías fracturadas, 287 de ellas eran primarias. El ministerio de educación informó que habían resultado dañadas más de 1.400 aulas en 100 escuelas, lo cual afectaba a una población de 60 mil estudiantes. El 24, el ministro de planificación, Fidel Chávez Mena, rindió un informe preliminar sobre los costos de rehabilitación y reconstrucción en diversas dependencias del gobierno. Chávez Mena desglosaba los costos así: Ministerio de Obras Públicas (MOP), 49.863.387 colones; Ministerio de Educación, 72 millones; Ministerio de Salud Pública, 236.1 millones; ANDA, 101.065.250 colones; ANTEL, 108.450.000 colones; CEL, 424.241.500 colones. Por otra parte, MIPLAN calculaba en 562.456.004 colones los costos por daños causados en viviendas particulares. Todo ello arrojaba un total de 1.554.176.141 colones.

Los daños al sector habitacional, de por sí crónicamente deficitario, fueron especialmente graves. Según los estimados de MIPLAN, el terremoto habría destruido 22.833 viviendas y arruinado otras 29.736. FUNDASAL, por su parte, estima que el número de familias afectadas podría oscilar entre 40 y 56 mil, distribuidas así: 5.000 en tugurios; 29.600 en mesones; 14.600 en colonias ilegales; 1.500 en campamentos y 5.000 desplazados; es decir, una población total damnificada de 280.000 personas, equivalente al 23 por ciento de la población total del área metropolitana de San Salvador.

Los daños sufridos en el aparato productivo fueron también, aparentemente, considerables. El 15, el director ejecutivo de ANEP, Juan Vicente Maldonado, declaró que "los daños dejados por el terremoto no se deben medir por el número de muertos, sino por el efecto que tendrán en la productividad, ya que el sismo ha dañado el corazón de la productividad del país." Maldonado estima-

ba que entre un 85 y un 90 por ciento del aparato industrial ubicado en San Salvador había resultado dañado. FENAPES informó que unos 6 mil pequeños negocios resultaron afectados. La SCIS estimó en 3 mil el número de comercios pequeños y medianos que sufrieron daños de consideración en el centro capitalino; asimismo, informó que, a consecuencia de ello, dichos negocios habrían sufrido una baja en su producto de 170 millones de colones, así como pérdidas de 25 millones de colones en mercadería y de 80 o 90 millones en edificios. La ASI informó que las pérdidas en maquinaria e infraestructura sufridas en su sector ascendían a 27 millones de colones. Datos posteriores ofrecidos por la CEPAL calculaban que el total de pérdidas en activos y producción representaba alrededor del 23 por ciento del PIB y que "la destrucción de capital activo supera al 10 por ciento del acervo total del país y la disminución del PIB equivale al 2 por ciento." En términos de desempleo, la CEPAL estimaba que, por efecto de ello, se habrían perdido 38.100 empleos en el sector informal, y la tasa de desempleo abierta en el área metropolitana de San Salvador habría aumentado de 26 a 35 por ciento.

La primera respuesta gubernamental fue suficientemente ágil y diligente. En el momento del sismo, el presidente Duarte se encontraba en la localidad de Bolívar (La Unión) inaugurando varias obras comunales en compañía del jefe del Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada, general Adolfo O. Blandón, y de otros miembros del gabinete y del alto mando. No obstante ello, en la tarde misma del 10, el consejo de ministros, reunido con el Comité de Emergencia Nacional, declaró a la ciudad de San Salvador y poblaciones aledañas en estado de calamidad pública y decretó la creación del Comité Nacional de Defensa Civil, designando como jefe de plaza de San Salvador al general Rinaldo Gólcher, director de la Policía de Hacienda. Bajo la coordinación del Comité Nacional de Defensa Civil empezaron a trabajar tres comisiones: la Comisión Empresarial de Asistencia (COEDA), integrada por diversos dirigentes del sector privado, bajo la dirección de Roberto Murray Meza, cuyo objetivo consistía en recibir, registrar y distribuir los donativos de toda índole para la población damnificada; la Comisión Ejecutiva Nacional de Emergencia, encargada de coordinar los mecanismos de trabajo mientras durase la situación de emergencia, integrada por los titulares de defensa, MOP, MAG y economía, y por el alcalde de San Salvador; y la Comisión de Reconstrucción.

Entre otras medidas encaminadas a afrontar el

estado de calamidad pública, el gobierno decretó el 11 la finalización del año escolar en la zona metropolitana y habilitó el aeropuerto militar de Ilopango para agilizar la recepción de la ayuda externa. El 13, para facilitar la recaudación de fondos en efectivo por parte de COEDA, el presidente Duarte decretó la creación del Comité de Finanzas de Emergencia Nacional (COMFIEN), integrado por el ministro de hacienda, y por los empresarios Roberto Mathies Regalado y Ricardo Hill Argüello. El 14, Duarte decretó la creación del Comité de Evaluación Técnica de Daños de Emergencia Nacional, integrado por los titulares del MOP, el presidente del Fondo Social para la Vivienda (FSV), tres representantes de la Cámara Salvadoreña de la Construcción (CASALCO) y dos representantes de la Asociación Salvadoreña de Ingenieros y Arquitectos (ASIA), con facultades para dictaminar sobre las edificaciones que debían ser demolidas. El mismo día, el Ministerio de Economía emitió un decreto en el cual advertía que quien alterara los precios de los productos y servicios en situación de emergencia nacional sería sometido a los tribunales competentes en base al artículo 342 del código penal. Por su parte, la asamblea legislativa ratificó el 13 el estado de calamidad pública decretado por el ejecutivo; aprobó una erogación de 10 millones de colones para atención inmediata a los damnificados; y decretó tres días de duelo nacional, al tiempo que prorrogó por 30 días más el estado de sitio.

Hasta el 15, COEDA operó con un centro de cómputo establecido en la ASI y un centro de recepción y distribución de donativos ubicado en las instalaciones de la Feria Internacional, desde donde las diversas instituciones de servicio canalizaban la ayuda a los damnificados. La distribución de los donativos no estuvo exenta de quejas de numerosos damnificados quienes denunciaron que no estaban recibiendo ningún tipo de ayuda. Voceros de la Cruz Roja confirmaron que mientras numerosas familias damnificadas de las barriadas populares al sur-oriente de San Salvador carecían de implementos para guarecerse de la intemperie, en los jardines de varias colonias residenciales (Miramonte, San Mateo, San Francisco, etc.) eran observables tiendas de campaña procedentes de la ayuda externa, sin que las casas de dichas colonias hubiesen sufrido daño alguno.

A partir del 16, la mecánica de distribución y canalización de la ayuda cambió. Según informó el Comité de Emergencia Nacional, el gobierno decidió que, debido al congestionamiento de damnificados en la Feria, las operaciones de distribución se

descentralizarían en 14 zonas controladas por la Alcaldía capitalina. No por ello disminuyeron las quejas de los damnificados, a las cuales se sumaron ahora las de la empresa privada y sectores de derecha, acusando al gobierno de politizar la distribución de la ayuda. En el mismo marco, aunque en una línea distinta de denuncia, destacó el caso de los 15 aviones de *Medical Aid to El Salvador* los cuales, cargados con varias toneladas de víveres y medicinas, no habían obtenido autorización para aterrizar en ninguna pista salvadoreña. Según indicó Sandy Brim, directora ejecutiva de la organización, el Departamento de Estado norteamericano les habría manifestado que el gobierno salvadoreño no permitía el ingreso de aviones que no fueran gubernamentales.

El vocero de la embajada de Estados Unidos en San Salvador, Jake Gillespie, reconoció tener algunos informes de que los aviones no podían aterrizar en Ilopango, debido al carácter militar de esta pista, pero podían hacerlo en el aeropuerto internacional de Comalapa. Un funcionario gubernamental salvadoreño admitió que, efectivamente, se había impedido el arribo de cierta ayuda por "razones de seguridad" debido a que "la situación de emergencia podría ser aprovechada por algún sector que quisiera ayudar a la guerrilla, trayéndole alimentos, medicinas y armas." Para resolver el problema, el obispo auxiliar de San Salvador, se apersonó en la embajada norteamericana, en el Comité de Emergencia Nacional y en COEDA. En la visita a la embajada, los funcionarios que lo atendieron inquirieron con suspicacia e insistencia por qué la Iglesia estaba dedicada a repartir medicinas, cuando debían ser los hospitales las "fuentes naturales" de tal distribución. El prelado recordó que en no pocas ocasiones el arzobispado había entregado medicinas a los hospitales, dada su escasez crónica de recursos por destinarlos a la guerra, y destacó el trabajo de la Iglesia en favor de la "medicina popular" desde mucho antes del terremoto. Aunque finalmente el problema logró resolverse —aparentemente, las dificultades principales provenían del Departamento de Estado y no tanto del gobierno salvadoreño— Monseñor Rosa comentó que tal situación constituía "un atentado contra el pueblo que necesita de la ayuda humanitaria."

En contraste con la inoperante "vocación de servicio" de los partidos políticos y de otras organizaciones y entidades únicamente aptas para la rapiña por las diversas encarnaciones del poder, la Iglesia católica desplegó desde el primer momento una solícita actividad de asistencia a los damnificados.

Inmediatamente después del terremoto, la arquidiócesis constituyó un Comité Eclesial de Emergencia que, el 14, había distribuido ya alimentos por un monto de 2.5 millones de colones a 12.615 familias en 23 parroquias, y había repartido medicinas a diversas instituciones hospitalarias entre las que figuraban los hospitales Rosales, Bloom y de Maternidad. Hasta el 15, el comité había atendido a más de la mitad de los damnificados por el sismo. El 22, había distribuido ayuda a 31 mil familias en 217 comunidades.

La tarea de la Iglesia no se limitó a la asistencia material inmediata a los damnificados. Tanto Monseñor Rivera como Monseñor Rosa destacaron insistentemente las condiciones de vida infrahumanas de la mayor parte de la población, condiciones que el terremoto había revelado masivamente a la conciencia pública; y enfatizaron que, a la hora de la reconstrucción, el gobierno debía privilegiar la reconstrucción de las viviendas de los más pobres, si quería evitar en el futuro "cataclismos sociales." Igualmente, fueron también las voces de la Iglesia las primeras en señalar que el terremoto no podía desligarse de la catástrofe global de la guerra, y en sugerir que el clima de solidaridad humana generado tras el sismo podría ser el momento para una tercera ronda de diálogo con el FMLN-FDR. Ya en su homilía del 12, Monseñor Rivera expresó que "con esta dura prueba esperamos resolver también, en forma definitiva, otra catástrofe aún más grave, porque está ligada a la decisión de los hombres: el terremoto de la guerra." Días después, en una conferencia de prensa ofrecida en San José de la Montaña, Monseñor Rosa manifestó su convicción de que "la guerra es ahora más absurda que nunca y esto que decimos no es una idea peregrina sino un sentir general; estamos convencidos de que las condiciones son nuevas después del terremoto y permiten un avance de las posturas que estaban completamente congeladas."

Como una muestra de su buena voluntad para favorecer las tareas de asistencia inmediata a los damnificados, el FMLN propuso el 11 una tregua a nivel nacional que, pese al rechazo del gobierno y de la Fuerza Armada, guardó unilateralmente por once días en prácticamente todo el país. Los altos mandos militares no se limitaron a calificar de "hipocresía" la propuesta. A partir del propio día 11 —según denunció Radio Venceremos— la Fuerza Armada intensificó sus operativos en Chalatenango, San Miguel y Usulután, al tiempo que multiplicó sus patrullajes ofensivos en La Unión y San Vicente, militarizó las carreteras y efectuó acciones

de bombardeo y ametrallamiento sobre zonas de población civil en Cuscatlán y Cabañas.

Aunque con menos recursos que la Iglesia, también el movimiento laboral, golpeado él mismo por el terremoto, asistió en la medida de sus posibilidades a los damnificados. AGEPYM, junto a la CTS y CGT, bases de la CLAT en el país, integraron el "Comité de Solidaridad de los Trabajadores CLAT de El Salvador." El 31 de octubre, la UNTS informó que, a esa fecha, las cuatro comisiones de trabajo organizadas para prestar ayuda a los damnificados habían distribuido asistencia alimentaria a 8.216 familias en 79 comunidades.

La ayuda internacional para asistir las necesidades inmediatas de los damnificados fue particularmente generosa. Según el informe rendido por COEDA al presidente Duarte el 19 de noviembre, El Salvador recibió ayuda de 31 países amigos a través de 163 vuelos y 30 envíos terrestres; por vía aérea se recibieron 1.431 toneladas de donativos en especie, los cuales fueron distribuidos por 216 instituciones de asistencia, públicas y privadas. En el traslado de los embarques desde el aeropuerto de Comalapa a las bodegas de la Feria trabajaron aproximadamente 800 voluntarios, quienes desplegaron 120 mil horas/hombre. En relación a la ayuda en efectivo, al 31 de octubre COMFIEN tenía recaudados 260 millones de colones, entre donativos nacionales e internacionales. Los países donantes fueron: Alemania Federal, Argelia, Argentina, Austria, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Dinamarca, Ecuador, España, Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, Guatemala, Holanda, Honduras, Israel, Italia, Japón, Malta, México, Nicaragua, Noruega, Panamá, Perú, Puerto Rico, República Dominicana, Suiza y Venezuela.

La ayuda norteamericana, aunque importante y necesaria, fue insignificante en relación a sus posibilidades, sobre todo si se comparan los 50 millones de dólares que el congreso aprobó antes de entrar en receso con los 70 millones presupuestados para la reconstrucción de su embajada en San Salvador. El 16 el secretario de Estado George Shultz efectuó una visita a San Salvador para evaluar *in situ* los daños del terremoto y planificar la asistencia estadounidense a la reconstrucción. Shultz llegó acompañado de los presidentes del BID y del Banco Mundial, así como de los embajadores de Gran Bretaña y de Japón en Washington, de 11 congresistas, 10 periodistas, 50 banqueros y diversos funcionarios del Departamento de Estado y del Pentágono.

Sobre la base financiera de los 50 millones de

dólares aprobados por el congreso, el viceministro de comunicaciones anunció el 30 de octubre un plan de emergencia nacional dividido en cinco grandes asignaciones: a) 75 millones de colones destinados a proveer soluciones habitacionales temporales a 30 mil familias; de ellos, 60 millones serían para la construcción de 20 mil unidades destinadas a familias que vivían en mesones, y 15 millones para un programa de mejoramiento de 10 mil tugurios; b) 80 millones de colones para la creación de una línea de crédito a largo plazo para la reparación de viviendas particulares; el crédito sería canalizado a través del sistema financiero nacional, con un año de gracia y a tasas de interés no mayores del 6 por ciento anual; c) 20 millones de colones destinados a la creación de 20 mil empleos temporales para la remoción de escombros en el área metropolitana; d) 50 millones de colones para el establecimiento de un programa de asistencia crediticia a la micro, pequeña y mediana empresa, a efecto de beneficiar a unas 5 mil unidades productivas; e) 25 millones de colones se destinarían a la reparación de los servicios públicos dañados por el terremoto, especialmente de 70 kilómetros de tuberías de agua potable y de 54 kilómetros de tuberías de aguas negras.

Cuando las tareas de asistencia inmediata a los damnificados aún no concluían, los sectores empresariales aprovecharon el incipiente clima de discusión sobre las tareas de la reconstrucción a mediano y largo plazo, para reclamar nuevamente del gobierno, como lo hacían antes del terremoto —pero ahora con mayores pretextos— un clima de "seguridad jurídica" para iniciar la reactivación económica. El 20, el presidente de ANEP, Carlos Borja Letona, señaló que "mientras el gobierno no comprenda que es única y exclusivamente a través de la empresa privada que se reactivará el país, no se podrán cubrir las necesidades de la población." Al día siguiente, la ASI difundió un comunicado en el cual instaba al gobierno a emitir una ley de reconstrucción nacional que descentralizara la administración pública y sustituyera "la actual política contractiva por la adopción de una política fiscal congruente con la realidad nacional."

En el fondo de las preocupaciones de la ASI se agazapaba el temor por el paquete de medidas fiscales que el ejecutivo presentara a comienzos del mes y que se cernía todavía como una espada de Damocles sobre las cabezas empresariales, según, obviamente, la propia percepción subjetiva de éstas. No obstante estas presiones, el 26 los 33 diputados democristianos aprobaron el decreto 503, el

cual ratificaba el "impuesto de guerra" aprobado el 2, aunque aplazaba temporalmente su vigencia. Tres días antes, en un eje paralelo de confrontación con la derecha, la bancada democristiana había aprobado la "ley de demoliciones" que, según las fracciones de oposición, el gobierno podía manipular para lesionar la propiedad privada.

Al par que se reactivaba la discusión sobre el paquete tributario y recrudecían los pleitos legislativos entre el PDC y la derecha, también la guerra empezó a cobrar de nuevo cierta intensidad. Tras once días de cumplir unilateralmente, con relativa eficacia, la tregua, el FMLN reinició su actividad bélica. El 23, en el curso de la operación "Viva el sexto aniversario de fundación del FMLN," unidades guerrilleras atacaron posiciones de la Fuerza Armada en la localidad de Santa Elena (Usulután), donde dieron muerte a 4 miembros de la defensa civil e hicieron prisionero a 15 más, además de destruir la alcaldía municipal y las oficinas de ANTEL y de correos. El 24, los insurgentes atacaron posiciones del ejército en un centro de comunicaciones situado sobre el kilómetro 24 de la carretera Suchitoto-San Salvador, causando daños a las instalaciones por más de 3 millones de colones y requisando 2 fusiles G-3, 1.700 cartuchos, 6 radios de comunicación y otros accesorios bélicos. El 26, el FMLN atacó el puesto del ejército en San Pedro Perulapán (Cuscatlán), donde también destruyó las oficinas de ANTEL.

Este curso de confrontación bélica cedió pasó, por un día, a una tregua militar con ocasión de la celebración en Asís (Italia) de la "Jornada mundial de oración por la paz" y del llamado de Juan Pablo II a "callar las armas" el 27 de octubre en todos aquellos países donde hubiese conflictos bélicos. Desde una semana antes, el FMLN había aceptado el llamado papal. El gobierno, en cambio, lo rechazó inicialmente, aduciendo que "el ejército tiene la misión constitucional de resguardar el territorio nacional todo el tiempo." Fue sólo después de insistentes gestiones de Monseñor Rivera ante el presidente Duarte para que la Fuerza Armada no desairara el deseo del pontífice, que el alto mando aceptó a regañadientes la iniciativa, la cual interpretó, para salvar su actitud inicial, no como una "tregua," sino como mera "suspensión" de los operativos militares. Al parecer, descontando dos incidentes que se produjeron en Cabañas y Cuscatlán, la tregua fue respetada por ambas partes. A finales de octubre, el balance mensual de la guerra mostraba cuotas claramente inferiores a los meses precedentes. De acuerdo a los informes de COPRE-

FA, durante el mes murieron 67 efectivos guerrilleros, 47 resultaron heridos, 2 fueron capturados y 8 desertaron. Asimismo; la Fuerza Armada habría decomisado al FMLN 58 fusiles, 7 lanzacohetes, 1 ametralladora y 1 subametralladora, 3 pistolas y otros pertrechos. Por otra parte, COPREFA denunció que el FMLN había destruido 3 oficinas de ANTEL, una de FEDECREDITO, 6 postes y 11 torres del tendido eléctrico.

No obstante este descenso coyuntural de la guerra, la comunidad de naciones no cesó sus exhortaciones para que el gobierno y el FMLN-FDR volvieran a la mesa de negociaciones. El 24, México, Perú, Argelia, Suecia y Yugoslavia presentaron al pleno de la ONU un proyecto de resolución sobre la situación de los derechos humanos en El Salvador, en el cual llamaban a las partes a que "lleven a cabo un diálogo realista y efectivo" y "establezcan los mecanismos apropiados para incorporar a todos los sectores de la vida nacional en la búsqueda de la paz."

En el ámbito de la política salvadoreña hacia la región, el acontecimiento más relevante de octubre lo constituyó el derribo, el 5, en el sur de Nicaragua, del avión C-123 a bordo del cual un grupo de mercenarios norteamericanos transportaba pertrechos bélicos para los contras, y la subsiguiente captura de Eugene Hasenfus, único sobreviviente del percance. El 8, la representación diplomática de Nicaragua en San Salvador distribuyó un comunicado en el cual informaba que entre los documentos decomisados por el ejército sandinista a Hasenfus figuraba un carnet No. 4422, extendido el 28 de julio de 1986 por el general Juan Rafael Bustillo, jefe de la Fuerza Aérea Salvadoreña (FAS). En sus primeras declaraciones, Hasenfus informó haber hecho otros 10 viajes para suministrar armamento a los contras, 6 de ellos desde el aeropuerto militar de Ilopango, y los restantes desde la base del Aguacate, en Honduras. Asimismo, declaró que al mando de las operaciones de abastecimiento desde Ilopango se encontraba un amigo personal de Bustillo, el cubano nacionalizado norteamericano Félix Rodríguez, de pseudónimo "Máx Gómez," en cuyo expediente figuraba una activa participación en la fracasada invasión a Bahía de Cochinos y 15 años de servicios sucios para la CIA en Vietnam, Bolivia y Centroamérica. Según información difundida por *Newsweek* en su edición del 27 de octubre, Gómez disponía en la sección suroeste de Ilopango de una pista delimitada como "área restringida" y llamada en código "Base del Cóndor," al lado de la cual, en hangares con techo de lámina corrugada,

guardaba los aviones Caribous y Hércules C-130, pintados en gris oscuro, a bordo de los cuales se transportaba el armamento a "los contras."

A partir de los números telefónicos decomisados a Hasenfus se pudo determinar también la ubicación, en San Salvador, de tres casas de seguridad desde donde Máx Gómez dirigía las operaciones. De acuerdo a listados telefónicos proporcionados a UPI por empleados de ANTEL, los responsables de las casas mantenían una constante comunicación con el ex-secretario adjunto de Defensa en el primer período de Reagan, mayor general retirado Richard V. Secord, residente en Falls Church (Virginia), así como con el teniente coronel Oliver North, subdirector de asuntos políticos-militares del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos.

El gobierno salvadoreño, pese a las explícitas declaraciones de Hasenfus, negó toda relación con las operaciones de abastecimiento a "los contras." El propio Duarte declaró el 9 que la vinculación de El Salvador en dicho caso constituía "una maniobra premeditada... es un plan comunista para quitarnos la ayuda norteamericana. El Salvador no tiene nada que ver en este asunto. Me lo ha dicho el alto mando." A su vez, el general Blandón negó que Gómez hubiese trabajado como asesor de la FAS y arguyó que "no podríamos contratar a un civil como asesor, a menos que sea con la autorización del presidente de la república y eso no ha sucedido."

Posteriormente, sin embargo, tanto el vicepresidente Bush como el secretario adjunto para asuntos interamericanos, Elliott Abrams, desmintieron indirecta, pero rotundamente, las declaraciones de Duarte y de Blandón. Bush afirmó el 15 que "he tenido contacto personal con el Señor Gómez para hablar sobre El Salvador... él es un asesor en contrainsurgencia destacado en El Salvador con la aprobación del presidente Duarte y de la Fuerza Armada." Más tarde, el 20, *The New York Times* recogía el testimonio de un congresista según el cual, durante una sesión secreta sostenida con el comité de inteligencia de la cámara de representantes, Elliott Abrams había declarado que el gobierno salvadoreño estaba asustado por la divulgación de su participación en las operaciones de abastecimiento a "los contras" y por ello persistía en negar públicamente su participación.

No obstante las evidencias arrojadas por la captura de Hasenfus sobre la agresión norteamericana contra Nicaragua, el congreso norteamericano aprobó el 17 de octubre los 100 millones de dólares

solicitados por Reagan para "los contras." Paralelamente, Estados Unidos vetó el 28 en el consejo de seguridad de la ONU un proyecto de resolución presentado por los países no alineados miembros de dicho consejo, los cuales hacían un llamado urgente para que el gobierno de Reagan diese cumplimiento al fallo de La Haya que pedía el cese inmediato de las actividades militares y paramilitares contra Nicaragua.

El mes de noviembre representó el retorno a la "normalidad" en la vida de San Salvador. No es que el considerable impacto del terremoto sobre las condiciones socio-económicas del país se hubiese desvanecido ni que la conmoción a que sometiera la conciencia colectiva hubiese constituido una impresión pasajera. Sencillamente, los efectos del sismo, en todos los órdenes, se amalgamaron con los del macroterremoto de la crisis socio-política crónica del país; en lugar de iniciar la reconstrucción, el gobierno encaminó mayores esfuerzos a la prolongación de la guerra, y en lugar de planear la reactivación económica en función del bien de toda la nación, la gestión democristiana y los sectores de derecha pronto volvieron a enfrascarse, tanto al interior de la asamblea legislativa como en los campos pagados de la prensa, en una pugna feroz por el control de la política económica.

En la línea de las propuestas de "reconstrucción" planteadas por ANEP y la ASI en la última semana de octubre, los gremios agroexportadores no tardaron en formular sus propias demandas, en vísperas de iniciarse la recolección de café, algodón y caña de azúcar. No extrañó que fuese ASCAFE quien primero reiterara su exigencia de un decreto inmediato de "libertad de empresa en el sector agroexportador, único medio para alcanzar un equilibrio económico y fiscal." Poco después, la Cooperativa Algodonera (COPAL) y el Comité de Fomento del Cultivo del Algodón manifestaron su "total adhesión" a los planteamientos de los cafetaleros, mientras que, el 9, la Asociación de Productores de Caña (PROCAÑA) amenazó con un paro de labores en el cultivo de caña a nivel nacional si el gobierno no había reconsiderado el 15 de noviembre aumentar el precio de la tonelada de caña de 60 a 75 colones. PROCAÑA decidió finalmente la suspensión del paro anunciado cuando INAZUCAR prometió a los cañeros la revisión de los precios de garantía del cultivo.

A lo largo del mes, la confrontación entre el gobierno y el sector privado experimentó una tensión creciente, sobre todo a partir del 13, cuando la asamblea legislativa aprobó el proyecto de ley defi-

nitoria de campesino y agricultor en pequeño, a efecto de dar cumplimiento al artículo 105 de la constitución, el cual estipula dicha definición como una condición previa a la implementación de la segunda fase de la reforma agraria. El 14, la Asociación de Ganaderos (AGES), PROCANA, COPAL y ASCAFE anunciaron la constitución del Frente Agropecuario Salvadoreño (FAS), al cual definieron como "un solo frente nacional que restaure la riqueza del agro y más que todo el rendimiento en beneficio de todo el pueblo."

La confrontación no se circunscribió al ámbito de la agroexportación, como se manifestó en las acaloradas disputas legislativas en torno al proyecto de "Ley transitoria de administración de empresas eléctricas," que los 33 diputados del PDC aprobaron en la plenaria del 13, contra las acusaciones de "estatización y violación flagrante a la constitución" espetadas por las fracciones opositoras. En su contenido fundamental, la ley estableció un período de un año a partir de la fecha de vencimiento de las concesiones para sentar las bases de un nuevo sistema de administración de las empresas que permitiera "la integración de los sistemas de distribución eléctrica a nivel nacional, y la participación del sector privado y de los trabajadores de la industria eléctrica de acuerdo a las necesidades del desarrollo económico y social del país;" durante ese año de transición, la administración de las empresas estaría a cargo de la CEL. De la asamblea, la disputa sobre las empresas eléctricas trascendió el 26 a la corte suprema de justicia, luego de que la CAESS interpusiera un recurso de amparo en contra del órgano legislativo, del presidente Duarte, del ministro de economía y de la junta directiva de la CEL por "despojo de sus bienes antes de ser oída y vencida previamente en juicio de conformidad con lo que establece la constitución."

En el ámbito laboral, nuevamente empezaron a aflorar denuncias de represión y medidas intimidatorias contra la ola reivindicativa que, una vez superadas las necesidades inmediatas suscitadas por el terremoto, incorporó a sus planteamientos los retos de más largo plazo generados por el sismo. A lo largo de la primera quincena de noviembre, surgieron algunos focos de lucha reivindicativa en "Etiquetas y elásticos," el Sindicato Unido de Trabajadores Ferroportuarios (SUTF) y la Asociación de Trabajadores del Ministerio de Obras Públicas (ATMOP), así como denuncias de la CST y de ACOPAI de represión contra afiliados suyos. No obstante, el acontecimiento laboral más relevante de la quincena lo constituyó el XVIII Congreso Federal Ordina-

rio de FENASTRAS, denominado "Con la unidad de los trabajadores conquistaremos la paz," el cual, entre el 13 y 15 de noviembre, contó con la participación de 300 delegados de 22 organizaciones sindicales miembros de FENASTRAS y representantes de diversas organizaciones sindicales europeas y estadounidenses. Entre los principales acuerdos del congreso, los participantes asumieron el compromiso de trabajar por la unidad laboral en torno a la UNTS y exigir la reanudación del diálogo con el FMLN-FDR con la incorporación de la UNTS a la tercera ronda.

Al día siguiente de finalizado el congreso, empero, ese compromiso de buscar la unidad laboral sufrió un revés de relativa importancia al anunciar el consejo consultivo de la UPD su decisión de desligarse de la UNTS, lo cual el dirigente Ramón Arístides Mendoza justificó aduciendo que, después de haber hecho "un análisis detallado de nuestra organización, nos hemos dado cuenta de que no hemos crecido; además, el problema es con los sindicatos urbanos y cuando se incorporan sectores universitarios. Las interpretaciones y posiciones adelantadas de las demás organizaciones nos hicieron tomar la decisión de retirarnos." Aunque en un primer momento las reacciones de la UNTS fueron relativamente moderadas, las declaraciones subsiguientes de Julio César Portillo, secretario general de ANDES, suscitaron un tenso intercambio de acusaciones entre la UPD y la UNTS. Portillo acusó a Arístides Mendoza de no haber podido "resistir las presiones y tentaciones en dólares que le hiciera el IADSL y la embajada de Estados Unidos a fin de forzar el retiro de la UPD" y reactivar el pacto social de ésta con el PDC. El asunto, finalmente, no trascendió a más, opacado en buena medida por la conferencia "En busca de la paz," que la UNTS organizó los días 22 y 23 de noviembre.

Las actividades de la conferencia se iniciaron el 22 con una "Marcha por la paz" en la cual participaron unas 7 mil personas, incluidos unos 170 delegados estadounidenses. A la marcha siguió la conferencia estrictamente tal en el auditorium de la UCA, la cual contó con la participación de unos 300 delegados laborales salvadoreños, además de los norteamericanos, y la presencia de las iglesias luterana y episcopal, el PCN, el PSD, la Universidad de El Salvador, la UCA, la Comisión de Derechos Humanos no Gubernamental (CDHES) y los comités de familiares de reos y desaparecidos políticos. Como conclusión del análisis de la realidad del país y de la injerencia del gobierno de Reagan, la conferencia acordó 5 resoluciones fundamentales: exigir

la reanudación del diálogo entre el gobierno salvadoreño y el FMLN-FDR; gestionar ante el congreso de Estados Unidos el cese de la ayuda económico-militar de Reagan al régimen salvadoreño; demandar el cese de la represión a la organización gremial y sindical y el respeto a los derechos humanos; demandar la libertad de los reos políticos de Mariona y de la cárcel de mujeres; y presionar para que se satisfagan las necesidades de los damnificados por el terremoto y se distribuya adecuadamente la ayuda internacional.

Los nuevos reclamos del movimiento laboral en favor del diálogo, empero, no tuvieron efecto alguno en términos de evitar el recrudescimiento de la guerra, la cual, después de un ritmo más bien moderado durante la primera quincena de noviembre, recobró su intensidad habitual a finales del mes.

Desde comienzos de noviembre, la Fuerza Armada prosiguió el desarrollo del plan "Unidos para reconstruir," en el marco del cual efectuó la inauguración de diversas obras de infraestructura social (clínicas, escuelas, etc.) en localidades aledañas a las zonas conflictivas, y mantuvo operativos de mediana envergadura en prácticamente todos los sectores donde está presente el FMLN, especialmente en los departamentos de Morazán, San Miguel, San Vicente y Chalatenango. Por su parte, durante las dos primeras semanas del mes, el FMLN llevó a cabo diversas acciones irregulares contra el ejército, en el curso de las cuales habría destruido 3 camiones de transporte de tropa en emboscadas a convoyes militares sobre la carretera Panamericana, y habría dañado 2 helicópteros en las inmediaciones de Dulce Nombre de María (Chalatenango).

A partir del 21, el FMLN inició la campaña "Comandantes Virgilio Peña Mendoza, Oscar Acevedo, Salvador Félix, presentes en la lucha anti-intervencionista por la paz," con un ataque contra dos compañías del destacamento militar número 5 en la zona de Guazapa. Según radio Venceremos, la acción fue ejecutada por unidades de los batallones "Carlos Arias" (FARN) y "Rafael Aguiñada Carranza" (FAL), y de la agrupación de batallones "Felipe Peña Mendoza," las cuales habrían causado al ejército 4 muertos y 12 heridos, y habrían capturado 2 fusiles M-16, 1,500 cartuchos, 20 granadas para M-79, un equipo de comunicación PRC-77 y diverso material bélico. La acción estuvo precedida de no menos de 8 emboscadas guerrilleras, efectuadas entre el 16 y 20 de noviembre, en los departamentos de Santa Ana, Cabañas, San Vicente, Usulután y San Miguel, en el curso de las cuales el

FMLN habría causado 61 bajas a la Fuerza Armada, la mayoría de ellas sobre las carreteras Panamericana y del Litoral.

El 23, el FMLN extendió la campaña hasta Chalatenango, al atacar las instalaciones militares ubicadas en El Poy, donde dio muerte a 2 agentes de la Policía Nacional y 2 de la Policía de Aduanas, capturó a 7 agentes más (4 de la primera y 3 de la segunda) y decomisó 4 fusiles G-3, 8 fusiles checos, 2 carabinas M-1, 2 ametralladoras, 2 pistolas y 4.000 cartuchos 7.62. El 24, el FMLN volvió a atacar al ejército en la zona de Guazapa, causándole 13 bajas más.

En el oriente, el 22, unidades de la BRAZ atacaron y tomaron posiciones militares en La Estancia, Cacaopera (Morazán), dando muerte a 10 efectivos e hirieron a otros 19, según informes de Venceremos. La Fuerza Armada, por su parte, admitió que, durante los combates —los cuales se prolongaron por 11 horas— perecieron 9 soldados y 12 resultaron heridos, mientras que en las filas del FMLN habrían perecido 23 guerrilleros. Apenas un día antes del ataque a Cacaopera, la fuerza aérea había efectuado un fuerte bombardeo en los alrededores de Perquín, a pocos kilómetros al nor-oeste de las posiciones atacadas por el FMLN.

Paralelamente a la intensificación de su actividad militar, el FMLN intensificó también durante la segunda quincena de noviembre su campaña de sabotaje a la economía. Entre el 16 y el 23, los rebeldes habrían saboteado 917 sacos de café en uva y destruido 25 postes y 4 torres del tendido eléctrico. El 21, descarrilaron un tren de FENADESAL entre San Vicente y Zacatecoluca, destruyendo completamente la máquina y 3 vagones. Según Venceremos, en el mismo período, unidades del FMLN hicieron 48 mítines en distintos puntos del país para explicar su punto de vista sobre los objetivos del plan "Unidos para reconstruir."

El último día de noviembre, el FMLN atacó, en la zona de Jucuarán (Usulután), al batallón de infantes de marina, al cual causó 25 bajas y decomisó una ametralladora punto 50, 2 fusiles M-16, 1 lanzacohetes Law y más de 2 mil cartuchos, además de destruir 15 fusiles, 1 cañón de 90 mm. y un equipo de comunicación PRC-77. Según Venceremos, el ataque estuvo acompañado de un hostigamiento con artillería liviana a posiciones del mismo batallón en el cerro El Mojón y a unidades de la Tercera Brigada de Infantería en los alrededores de Chirilagua y balneario El Coco, presumiblemente para distraer la atención del ejército y de la fuerza aérea.

En su balance mensual de noviembre, radio Venceremos informó que, durante el mes, el FMLN ocasionó 568 bajas a la Fuerza Armada, incluyendo 11 prisioneros. Entre las bajas se contaban 2 tenientes, 1 sub-teniente, 2 cadetes, 5 sargentos, 7 cabos y 1 explosivista. Asimismo, Venceremos aseguró que el FMLN había decomisado 1 ametralladora punto 50, un lanzacohetes M-79 y otro Law, 34 armas largas entre fusiles y ametralladoras, 16 armas cortas, 37 granadas para M-79, más de 12 mil cartuchos para fusil y una radio de comunicación PRC-77. También habría averiado 3 helicópteros y destruido 9 camiones militares, así como las instalaciones castrenses, antenas y equipo de comunicación del puesto fronterizo de El Poy. En relación al sabotaje, Venceremos informó que el FMLN destruyó 120 estructuras del tendido eléctrico —entre postes y torres—, 5 máquinas del MOP, 4 máquinas agrícolas y una máquina de tren y 3 vagones; y sabotó 2.062 quintales de café.

El gobierno no desaprovechó esta intensificación de la actividad guerrillera para justificar su posición de rechazo al diálogo y, específicamente, a la plataforma emitida por el FMLN-FDR el 5 de noviembre, en la cual los Frentes sugerían una serie de medidas para implementar la reconstrucción integral de San Salvador y la reactivación económica de todo el país. Entre dichas medidas, el FMLN-FDR se pronunciaba una vez más por la realización de un "amplio diálogo nacional entre todas las fuerzas sociales y políticas" y, en el marco de este esfuerzo, por la reanudación del "diálogo entre las partes beligerantes en pos de una solución negociada al conflicto."

Internacionalmente, la solución dialogada al conflicto volvió a recibir un importante espaldarazo el 27, cuando la asamblea general de la ONU, por 98 votos a favor, ninguno en contra y 37 abstenciones, aprobó el proyecto de resolución sobre la situación de los derechos humanos en El Salvador, que copatrocinaran a finales de octubre los gobiernos de México, Perú, Argelia, Suecia y Yugoslavia. Dos días antes, durante su intervención ante la ONU, el presidente Duarte había expuesto la situación del país tras el terremoto y solicitado la ayuda internacional para la reconstrucción, al tiempo que había aceptado la iniciativa conjunta de los secretarios generales de la ONU y de la OEA para la revitalización de las gestiones de Contadora.

La iniciativa ONU-OEA, junto a la resolución sobre Centroamérica aprobada por la XVI Asamblea General de la OEA durante su reunión en Guatemala, entre el 10 y 17 de noviembre,

representó un paso importante en favor de la distensión regional, pese a los esfuerzos en contra del gobierno de Reagan y de sus aliados centroamericanos. En la misma línea, aunque con menor importancia, también suscitó algunas esperanzas el control ganado por los demócratas sobre el congreso norteamericano en las elecciones legislativas del 4 de noviembre. Con su triunfo, los demócratas obtuvieron 55 de los 100 escaños del senado y ganaron el control de 17 comités senatoriales durante los próximos 2 años, propinando a Reagan el revés político más severo de sus dos períodos presidenciales, tomando en cuenta que en los meses previos a los comicios el mandatario había recorrido más de 40 mil kilómetros en abierta campaña proselitista a favor de los candidatos republicanos. Algunos congresistas opositores al gobierno comentaron que la "era Reagan" había llegado a su fin y auguraron un giro hacia la moderación en la política exterior norteamericana en Centroamérica. No fue esa, sin embargo, la percepción del embajador Edwin Corr, como tampoco la del presidente Duarte ni la del alto mando de la Fuerza Armada, quienes aseguraron que el proceso salvadoreño gozaba de análogas simpatías entre demócratas y republicanos, por lo cual no era de esperarse un cambio de postura de la Casa Blanca frente al país.

1986 concluyó en medio de una ola de agitación socio-política mayor, si cabe, que la que el programa de estabilización y reactivación económica desatara a principios del año.

El foco de la crisis lo constituyó nuevamente la política económica implementada por el gobierno para enfrentar el déficit fiscal en el presupuesto general de la nación de 1987, y, en menor medida, pero en el mismo marco de protesta, las reformas a la ley electoral aprobadas por los 33 diputados del PDC en la sesión legislativa del 23 de diciembre.

En relación a lo primero, desde comienzos del mes, la discusión del paquete de reformas fiscales que el ejecutivo enviara a la asamblea a principios de octubre experimentó un curso de tensiones *in crescendo*. Las tensiones hicieron crisis el 18, cuando los 33 diputados democristianos aprobaron el paquete de 13 nuevos impuestos (el "impuesto de guerra," que originalmente también formaba parte del paquete, ya había sido aprobado el 2 de octubre). A la aprobación de las reformas siguió inmediatamente la campaña de protestas más virulenta que la derecha ha orquestado contra Duarte desde su asunción presidencial en junio de 1984. En el marco de la campaña, ARENA y PAISA llamaron a una "rebelión fiscal" contra el pago de los

nuevos impuestos, mientras que un autodenominado "Movimiento Acción Nacional" (MAN) publicó el 26 un comunicado en el cual exigía la renuncia del presidente Duarte ante su "evidente incapacidad para gobernar el país." En la misma línea, en su edición del día 30, *El Diario de Hoy* reproducía un documento presuntamente entregado por ASCAFE al ministro de defensa, general Vides Casanova, en el cual los cafetaleros aducían que el "impuesto de guerra" constituía "en términos de guerra psicológica una operación favorable a los contrarios (FMLN-FDR)," e instaban a la Fuerza Armada a romper el pacto político suscrito con el PDC en enero de 1980, al tiempo que aconsejaban el retorno a los organismos para-militares del tipo ORDEN.

Las protestas contra el paquete tributario no tardaron en fusionarse con las que desencadenó, el 23, la aprobación de las reformas a la ley electoral contenidas en el Decreto 525. Como en el caso del paquete tributario, las reformas databan de varios meses atrás, pero sólo habían sido introducidas formalmente hasta en la sesión legislativa del 27 de noviembre y luego sometidas sucesivamente a las observaciones del ejecutivo y de la comisión de legislación y puntos constitucionales de la asamblea. Durante ese lapso, las fracciones de oposición no habían cesado de adversarlas, arguyendo que, al ampliar los poderes administrativos del presidente del Consejo Central de Elecciones (CCE) —actualmente el Dr. Mario Samayoa, del PDC—, el partido oficial podría "manipular el área administrativa, desde los empadronadores, los que extienden los carnets, el manejo de las computadoras y la parte del registro electoral," lo cual permitiría al PDC "montar un fraude para las próximas elecciones."

Entre las reformas electorales se contaban modificaciones a la ley de inscripción de partidos políticos, otorgando al CCE un plazo de 60 días para decidir la inscripción de los partidos pendientes de inscripción; y al código penal, sancionando con la prisión (de 2 a 4 años) a los funcionarios públicos o personas particulares que "retarden u obstaculicen la inscripción de un ciudadano en el registro electoral." Con las reformas, el PDC pretendió profundizar las contradicciones entre Patria Libre y ARENA y el PCN, cuyos delegados ante el CCE habían bloqueado sistemáticamente la inscripción de Patria Libre.

Derivadamente, tanto la aprobación del paquete tributario como de las reformas electorales, en la medida en que mostraron la unanimidad de

criterio de la bancada democristiana frente a las fracciones de derecha, constituyeron un mentís a las versiones de que una decena de diputados del PDC, encabezados por uno de los secretarios de la directiva legislativa, el Dr. José Humberto Posada Sánchez, estaban descontentos con la línea política impuesta al partido por la "argolla" de Rey Prendes y Castillo Claramount, y con la política económica, particularmente en materia fiscal, implementada por el gobierno (según los rumores, la fracción democristiana disidente habría solicitado la renuncia del ministro de hacienda, Ricardo J. López).

Las disputas legislativas entre el PDC y la derecha, sin embargo, no obstaron para aprobar la prórroga del estado de sitio, por 30 días más, a partir del 13 de diciembre. La aprobación contó con los votos de los 53 diputados presentes.

Mientras tanto, la guerra continuó profundizando el impulso cobrado en la segunda quincena de noviembre, sin ofrecer, sin embargo, perspectivas de desempantanamiento en el mediano plazo. Una muestra de ello la constituyó el impasse de la operación Fénix, realizada ininterrumpidamente desde enero en el área de Guazapa. El 4, el comandante de la brigada de artillería, coronel Rafael Larios, declaró que, pese a los esfuerzos de contrainsurgencia en dicha zona, "todavía existe persistencia guerrillera." "Desgraciadamente" —añadió— y a pesar de que la operación Fénix tiene casi un año, tenemos una desventaja: en la noche puede haber un terrorista y en el día un simple campesino. Esto nos hace más difícil el trabajo y se hace más difícil en términos de tiempo la solución."

Por su parte, el FMLN intensificó la campaña militar "Comandantes Virginia Peña Mendoza, Oscar Acevedo, Salvador Félix, presentes en la lucha anti-intervencionista por la paz." El 6 de diciembre, en el curso de la operación denominada "Organización, unidad y lucha de todo el pueblo para la victoria," dos batallones del FMLN atacaron el cuartel de la Policía Nacional, la base del Destacamento Militar No. 3 y una subestación de energía eléctrica ubicados en Santa Rosa de Lima. Durante el ataque, efectuado con cañones de 81 y 90 mm., el FMLN causó 27 muertos y 33 heridos en las filas de la Fuerza Armada, destruyó parcialmente el cuartel de la Policía Nacional y totalmente la subestación y dos camiones militares, al tiempo que capturó todo el equipo de comunicación del puesto de mando de la base militar, compuesto por 6 radios PRC-77, una radio MX y otra Motorola; un lanzagranadas M-79, 4 fusiles M-16 y varios miles de

cartuchos. Simultáneamente a esta acción, otras dos unidades guerrilleras ocuparon la población de Anamorós —14 kilómetros al norte de Santa Rosa de Lima— y atacaron posiciones del Destacamento Militar Número 4 en las proximidades de Corinto (Morazán).

Estas acciones se prolongaron a lo largo del mes en una serie de numerosas emboscadas contra convoyes militares y posiciones de la Fuerza Armada en diversos puntos del país, especialmente en la zona oriental. Entre las emboscadas destacaron la efectuada el 8, sobre la carretera que de San Cayetano Istepeque conduce a San Vicente, contra un convoy de la Quinta Brigada de Infantería; en dicha emboscada, según admitió COPREFA, resultó lesionado el coronel Rodolfo Campos Amaya, comandante de dicha brigada. Días después, el 20 de diciembre, el FMLN emboscó otro convoy militar sobre la carretera Sensuntepeque-Tejutepeque, con saldo de 20 bajas castrenses, entre muertos y heridos; entre éstos se contó el comandante del Destacamento Militar Número 2, coronel Carlos Mauricio Guzmán Aguilar.

Entre el 8 y el 14 de diciembre, el FMLN desarrolló su séptima campaña de sabotaje al transporte terrestre a nivel nacional, la cual resultó ser aparentemente la más violenta de las llevadas a cabo durante 1986. Según los informes de prensa, durante la semana el FMLN habría destruido, dañado o ametrallado más de 30 vehículos, y provocado la muerte de por lo menos 3 civiles, además de haber herido a 25 más. Al parecer, el boicot habría logrado paralizar el tráfico en un 80 por ciento en el extremo oriental del país y en un 50 por ciento en los departamentos de San Vicente y Cabañas. El norte y occidente, en cambio, aunque fueron escenario de esporádicas acciones de sabotaje, nos mostraron una paralización apreciable. Por otra parte, paralelamente al boicot al transporte, el FMLN mantuvo una intensa campaña contra la recolección del café, y en algunas áreas de la zona oriental, que la Fuerza Armada presuntamente había "limpiado" ya de guerrilleros, interrumpió considerablemente las tareas de recolección.

Según el balance mensual ofrecido por Radio Venceremos, el FMLN habría causado a la Fuerza Armada, a lo largo de diciembre, 629 bajas, entre muertos y heridos. Por su parte, COPREFA informó que el FMLN había sufrido 95 bajas (62 muertos y 33 heridos) en combates registrados en diversos puntos del país durante el mes. Asimismo, informó que el FMLN había perdido 19 fusiles de diferente calibre, un lanzagranadas M-79, una

ametralladora M-60, 11 pistolas, 57 minas y 4 granadas.

El 31 de diciembre, al efectuar una evaluación global del desarrollo del proceso político durante el año, Monseñor Rivera destacó que uno de los problemas fundamentales del país lo seguía constituyendo la guerra, y subrayó que "mientras haya una guerra es difícil que no haya violaciones a los derechos humanos." Según las cifras ofrecidas por el arzobispo, el conflicto habría arrojado en el año un saldo de 1.725 muertos, distribuidos así: 59 por explosión de minas; 1.030 por acciones insurgentes y contrainsurgentes; 173 a manos de efectivos militares; 421 bajas del ejército y 42 víctimas de los escuadrones de la muerte. Ante esa situación, el prelado concluyó en la necesidad imperiosa de reanudar los esfuerzos de diálogo, y sugirió, a tal efecto, recoger los acuerdos alcanzados en la reunión preparatoria de México, realizada a finales de agosto.

Junto a las voces de la Iglesia, el movimiento laboral continuó pronunciándose por una salida política al conflicto. El evento más relevante en esta línea lo constituyó la XX Asamblea General de ANDES, "Educamos para construir nuestro propio futuro," realizada entre el 1 y 3 de diciembre. El evento contó con la participación de 151 delegados de todo el país, y 167 invitados especiales, representando a educadores y sindicalistas de Alemania Federal, Suiza, Italia, Dinamarca, Canadá, Estados Unidos, México, Honduras y Nicaragua. Entre los acuerdos de la asamblea destacó nuevamente, en la línea del XVIII Congreso Federal de FENASTRAS y de la conferencia "En busca de la paz," el compromiso de seguir trabajando en favor de una solución dialogada al conflicto y de propiciar la unidad de los trabajadores en torno a la UNTS. No obstante estas presiones, el gobierno adujo una vez más que todavía no se habían reabierto los "espacios políticos" suficientes para retornar a la mesa de diálogo con el FMLN-FDR, aun cuando el canciller Acevedo Peralta, a su paso por Madrid el 19 de diciembre, declarara que "tal vez para mediados del año próximo pueda reabrirse el diálogo, y así se lo hemos anunciado al mediador."

Ni siquiera las negociaciones para la liberación del coronel Omar Napoleón Avalos, en las cuales la Fuerza Armada podría haber tenido más interés que en el diálogo, corrieron mejor suerte. El 24, a través de Radio Venceremos, el FMLN propuso liberar a Avalos el 7 de enero a cambio de la libertad de 52 reos políticos y del salvoconducto para que un grupo de guerrilleros lisiados pudieran salir al extranjero. Como en ocasiones anteriores, la pro-

puesta no recibió una respuesta favorable de parte del alto mando castrense.

Otro indicio de los escollos enfrentados por los esfuerzos de humanización lo constituyó el fracaso de la nueva petición de amnistía para los reos políticos, que el Comité "Monseñor Oscar A. Romero" presentara a la asamblea legislativa el 28 de agosto y reiterara una vez más el 11 de diciembre, en audiencia sostenida con el presidente de dicho organismo. Como medida de presión para obtener una respuesta positiva 300 reos políticos de los penales de Mariona y de la cárcel de mujeres iniciaron el 20 una huelga de hambre con carácter indefinido, a la cual se sumaron 2 días después 275 reos más (de un total de 1.020 reos políticos, según las cifras ofrecidas por el comité).

En el ámbito internacional, siguieron aflorando nuevas pruebas sobre la participación de la base militar de Ilopango en las operaciones de abastecimiento a "los contras" y el escándalo de la venta de armas a Irán. Según documentos del Departamento de Transportes de Estados Unidos, la compañía *Southern Air Transport*, la cual perteneció a la CIA y participó en la entrega de armas a Irán y a "los contras," transportó más de 400 toneladas de carga al aeropuerto de Ilopango. La compañía habría hecho 15 vuelos a la base en los primeros 6 meses de 1986, desde Portugal, Nueva Orleans, Miami y Washington. Frente a este cúmulo de pruebas, resultó por ello tanto más grotesco y ridículo el discurso pronunciado el 10 por el general Juan Rafael Bustillo en ocasión del "Día de la aviación nacional," acusando a la prensa internacional de "espionaje" y de no respetar los "secretos personales" de Reagan y sus funcionarios al revelar los negocios de éstos con los iraníes.

Con todo, la política exterior salvadoreña no escatimó esfuerzos para sobreponerse al desmedro sufrido en su imagen internacional por el asunto de Ilopango. Aun cuando las noticias internacionales sobre la visita de Duarte a la ONU denotaban más bien que el mandatario habría sido objeto de un recibimiento frío y distanciado tanto en la ONU como por parte del mismo gobierno de Reagan, el canciller Acevedo Peralta insistió en calificar de "exitosa" la gira, arguyendo en apoyo de tal apreciación el millón de dólares que Suecia, Finlandia y Alemania Federal se habían apresurado a donar para la reconstrucción de San Salvador, y el compromiso de otros 18 países al apoyar financieramente dicha empresa.

A la gira de Duarte en demanda de coopera-

ción para la reconstrucción pronto siguieron otras giras, entre ellas las del ministro de planificación, y del propio Acevedo Peralta. El periplo de Chávez Mena, al parecer, resultó particularmente fructífero. Al término de sus visitas a Italia, España, Francia, Bélgica y Alemania Federal, Chávez Mena informó el 5, en Bonn, que había obtenido un total de 215 millones de dólares en concepto de ayuda firmada o prometida, 130 millones de los cuales procederían de Italia y 50 de Alemania. Ese mismo día, por su parte, el canciller inició una gira por Suiza, Bélgica, Alemania y España, para recaudar toda la ayuda posible para diversos proyectos de reconstrucción y entregar en La Haya el compromiso de comparecencia conjunta con Honduras sobre el litigio limítrofe. En relación a esto último, el 11, el presidente de la corte internacional recibió de Acevedo Peralta y del canciller Hondureño el compromiso de ambos gobiernos de someterse al dictamen de la corte en el asunto del diferendo.

Si, en el panorama nacional, 1986 concluyó más convulsionado que como se inició, otro tanto cabe decir con respecto a la situación regional, a juzgar por los tensos incidentes fronterizos entre Honduras y Nicaragua en la primera quincena de diciembre, cuando tropas norteamericanas se movilizaron a la zona oriental de Honduras con equipos de artillería, incluidos cañones de 105 mm., para hacer ejercicios militares conjuntos con tropas hondureñas. Al amparo de las maniobras, un contingente de 1.500 contrarrevolucionarios ingresó a territorio de Nicaragua, lo cual, a su vez, forzó al ejército sandinista a un contraataque a fondo. Apparentemente, según las denuncias del gobierno hondureño, las tropas sandinistas al perseguir a "los contras" habrían incurrido en territorio de Honduras. En respuesta a ello, el 7, la aviación hondureña bombardeó diversas poblaciones y posiciones militares sandinistas en los departamentos de Nueva Segovia y Jinotega. El 9, el gobierno de Nicaragua procedió a convocar con carácter urgente a una reunión del consejo de seguridad de la ONU, en el desarrollo de la cual Estados Unidos y Honduras, por un lado, y Nicaragua, por el otro, intercambiaron acres acusaciones sobre la responsabilidad por los incidentes.

Finalmente, las tensiones empezaron a amainar, y Honduras agradeció públicamente al gobierno de Reagan el inmediato apoyo prestado para el transporte aéreo de sus tropas a la zona de conflicto y la asesoría brindada durante los enfrentamientos con el ejército sandinista; curiosamente, tanto el Departamento de Estado como el Pentágo-

no guardaron un absoluto hermetismo sobre la situación, negándose a confirmar o desmentir los motivos de la cálida gratitud hondureña.

En medio de este horizonte de enfrentamientos bélicos, con todo, los esfuerzos en favor de la distensión regional recibieron un nuevo espaldarazo en la reunión que los grupos de Contadora y de Apoyo sostuvieron en Río de Janeiro entre el 16 y

18 de diciembre. Entre otras resoluciones del encuentro, los cancilleres de ambos grupos acordaron efectuar una gira por Centroamérica, a la cual también invitaron también a los secretarios de la ONU, Javier Pérez de Cuéllar, y de la OEA, Joao Baena Soares. Ambas accedieron gustosamente a la iniciativa.

